

que revocó la pronunciada el 17 de Diciembre del año próximo pasado por el Juez de Distrito, en la que se disponía dar á Nava por compurgado con el tiempo que llevaba de prision, y cuya sentencia condenó á Nava á una multa de dos mil pesos ó á dos años de presidio, contados desde el día de su aprehension; lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Procurador General de la Nación, así como lo alegado ante el Tribunal de Circuito por el Lic. Francisco Rodriguez, defensor de Nava, nombrado por éste y á cuyo alegato se refirió el Lic. Rodriguez al citársele de Orden de esta 1ª Sala para la vista de la causa; y visto todo lo demás que convino.

Considerando: que en el proceso consta que se encontraron en la casa de Nava los instrumentos que se diseñaron de fojas 52. á 55 del cuaderno principal y las monedas falsas y recortes de que se habla á fojas 2 del mismo cuaderno, lo cual tambien consta por declaracion del mismo Nava, cuyos instrumentos son propios para acuñar moneda falsa.

Considerando tambien: que en el proceso no hay constancia alguna de que esos objetos fueran introducidos á la casa de Nava sin su conocimiento, así como por confesion suya consta que vió la introduccion del costal que contenia esos objetos, aunque alega que no vió los mismos objetos, y

Considerando por último: que confirmada por el Tribunal de Circuito la sentencia pronunciada por el de Distrito respecto de Mencses y de Aguirre, ha causado ejecutoria, y en esa parte solo está sujeta á simple revision; en virtud de lo que dispone el art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y los artículos 2º y 3º de la de 1º de Noviembre de 1841, se decreta:

1º Que se dá por revisada la causa respecto de Antonio Mencses é Hilario Aguirre.

2º Se revoca la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito en la parte que condena á Juan Nava, á una multa de dos mil pesos ó dos años de presidio contados

desde el día de su aprehension, y se le condena á un año de obras públicas, contado desde que fué reducido á prision, y no computándose el tiempo que ha estado en libertad bajo de fianza.

3º Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo mandaron los Ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron (Firmados.) —S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—Luis M. Aguilar, secretario.—Son copias. México, Abril 25 de 1871.—Agustin Peralta, oficial mayor.

## NULIDAD.

*Recurso de nulidad interpuesto por D. José A. Aluja ante el Tribunal Superior de la línea de Oriente en el Estado de Veracruz, fungiendo por la ley como Tribunal de Circuito, contra la sentencia pronunciada por el mismo Tribunal en el juicio promovido por D. Pablo Senties como cesionario del fisco contra dicho Aluja.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO FISCAL.

El Fiscal dice: que ha examinado detenidamente los voluminosos autos que forman este negocio, y de ellos aparece: que el ciudadano Pablo Senties, en virtud de la autorizacion concedida por la ley de 1º de Enero de mil ochocientos cincuenta y seis, adquirió del Fisco, como cesionario, los derechos que le correspondian á la Hacienda pública por razon del contrabando, que allí en el año de mil ochocientos cincuenta y dos introdujo al interior de la República

una casa de comercio establecida en el pueblo de Cosamaloapan, y la que se giraba bajo la razon social "Miranda y Compañía"

Inútil le parece al suscrito, para el fin que se propone en este pedimento; detenerse á manifestar los términos de este contrato, puesto que siempre los Tribunales los han reconocido por buenos y acerca de su legalidad nunca se ha hecho ninguna objecion.

Revestido ya Senties de los derechos fiscales de que se ha hablado antes, se presentó á deducirlos en juicio ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por estar el pueblo de Cosamaloapan comprendido en su jurisdiccion. El autor dirigió su demanda contra el súbdito español D. José Ahuja, en calidad de socio industrial ó gerente de la referida casa de comercio; fundándose para ello en la naturaleza propia de las sociedades ó compañías en *comandita*.

Seguido el juicio por todos sus trámites y con total arreglo á las disposiciones vigentes en materias de comercio, y sobre todo en asuntos de comiso, y cuyas disposiciones son: El Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas de 4 de Octubre de 1845, Pauta de comisos de 28 de Diciembre de 1842, y Reglamento de 24 de Noviembre de 1849.

Se pronunció en definitiva el auto acesorado de 28 de Diciembre de 1864, en que se mandan tres cosas: Primera: que se declaren incursos en la pena de comiso los géneros blancos de algodón, hilo de bolita, y carretilla expresados en la demanda: Segunda: que se condene á D. José Antonio Ahuja al pago sencillo de los géneros y al doble del de hilo, calculado al precio por peritos conforme al de la plaza de Cosamaloapan al tiempo de su introduccion. y Tercera que se le condene tambien al pago de las costas causadas en el juicio, reservándosele los derechos que le competan para repetirlos contra su socio comanditario, y á la reposicion del papel con el del sello correspondiente.

Notificado este auto á los interesados, todos se conformaron con el, á excepcion del reo D. José Antonio Ahuja, el cual apeló para ante el Tribunal de Circuito, teniendo lugar así la segunda instancia.

Segunda: esta igualmente por sus respectivos trámites, á su debido tiempo se pronunció el fallo definitivo de 20 de Noviembre de 1865, y obra á fojas 600 vuelta y siguientes del segundo cuaderno.

La parte resolutive de este fallo comprende dos puntos: el uno, principal; el otro accesorio. El primero es la confirmacion en todas sus partes de la sentencia de primera instancia. El segundo tiene por objeto explicar, ó mejor dicho, detallar la manera con que se ha de proceder á la tasacion de las costas causadas en la segunda instancia, y mandar al inferior remita todas las actuaciones al Administrador de rentas de Cosamaloapan, á fin de que proceda á practicar la liquidacion respectiva del comiso, en vista de los documentos originales; y hecho que sea esto se vuelvan al Juzgado de Distrito, para que á su vez haga efectivo el pago de lo que resulte deberse á la Hacienda pública, así como el de las costas y el del papel sellado que debiere reponerse.

Hasta aquí el negocio parecia seguir una tramitacion regular, sin embargo de las muchas y repetidas diligencias que se encuentran hacinadas; y que revelan desde luego la táctica ya demasiado vulgar de dilatar hasta donde es posible la aplicacion de la justicia. Pero desde este punto en adelante se arroja todo disfraz, y la parte, vencida ya dos veces en juicio, apela á todos los medios posibles y aun ilegales para entretener el tiempo, y cansar y fastidiar á la contraria, segura y convencida de que ya es imposible triunfar en el negocio principal. En confirmacion de lo expuesto, el Fiscal seguiria punto por punto cada una de las diligencias; pero semejante trabajo, sobre ser muy enojoso, fastidiaria hasta el exceso la atencion del Tribunal; por lo mismo el sus-

crito señalará uno que otro incidente que confirmarán lo expuesto, pudiéndose decir, que lo voluminoso de los autos es la prueba mas relevante de la temeridad con que la parte de Ahuja ha proseguido en todas las instancias de este negocio y recursos intentados en él.

El Fiscal, pues, seguirá, bien que brevemente y en cuanto baste, la secuela del negocio.

Notificada que fué á la parte de Ahuja la sentencia de vista, en la persona de su apoderado, probó interponer el recurso de súplica; pero habiéndole manifestado el Tribunal que era improcedente, por prohibirlo el artículo 79 de la ley de 6 de Marzo de 1862, mandada observar por el artículo 19 del decreto número 2 de 28 de Mayo de 1864. Entonces trató de introducir un nuevo y extraordinario recurso jamas conocido en nuestros tribunales, cual es de *Reclamacion por ser extranjero*. Inútil seria decir que este se desechó de plano por el tribunal, y el promovente no insistió ya mas en él.

Entonces se echó mano de otro de peor ley, pues se llevó el descaro al extremo de imputar y reprochar al C. Magistrado Oropeza ciertas faltas de instruccion y probidad; pues que le achaca el haber querido por sí mismo cobrar las costas causadas en su tribunal, contra lo establecido por los mejores y mas respetables autores; y haber retenido maliciosamente la remision de los autos al inferior, hasta que llegara el secretario de aquel, C. Miguel Palacio, cuya persona, segun decia la parte de Ahuja, lo era hostil, y en consecuencia de todo eso lo recusa formalmente. El Magistrado, ofendido, pero con toda la calma y serenidad propias y características de la autoridad judicial, rechazó la ofensa y declaró: que supuesto que las causas de recusacion que se alegaban eran notoriamente falsas, se desechaba la recusacion, previniendo al mismo tiempo al inferior, hiciera saber esta resolucion á D. José Antonio Ahuja perso-

nalmente, por haber este revocado el poder que le habia conferido á D. Nazario Molina, (fojas 622.)

Hecha por fin la regulacion de las costas por la secretaría del Tribunal de Circuito, se entregaron los autos al C. Pablo Senties, en 6 de Enero de 1866, en 628 fojas útiles, para que por su conducto se remitieran al Juez inferior, y este cumpliera en todas sus partes el auto de revision de 30 de Noviembre de 1865.

Por la diligencia que obra á fojas 628 vuelta del expediente, queda justificado, que Senties cumplió fielmente con su encargo, entregando el expediente al Juez lego C. Vicente Azamar; consta igualmente, que al hacer la entrega, Senties suplicó al referido Juez Azamar se excusara de conocer en el negocio, y como quiera que de esa solicitud surgieran algunas cuestiones de puro derecho, el C. Azamar mandó se previniera á Senties nombrase un asesor con quien consultase para la resolucion de ellas, haciéndose saber todo esto á la parte contraria (fojas citada.)

Notificada esta providencia al C. Senties, se desiste de la recusacion; pues reconoce que el C. Azamar, como Juez mero ejecutor no era recusable, y pide en consecuencia prosiga obrando como crea conforme á derecho (fojas 629.) Pero el Sr. Azamar, ya por un principio justo de delicadeza, como tambien por las atendibles razones que expone en su auto de 12 de Enero del citado año de 866, se declara inhibido para continuar conociendo, y manda en consecuencia se remita el expediente al funcionario que deba conocer de él en derecho [fojas 630.]

Entonces la parte de Ahuja, viendo que aquí se le presentaba una ocasion oportuna para entorpecer la marcha del negocio con otro pretexto, tuvo buen cuidado de aprovecharla.

Como quiera que el C. Azamar, Juez sustituto del de 1ª instancia del Canton de Cosamaloapan, decretó que los autos pasa-

ran al funcionario que debía conocer del expediente, la parte de Ahuja se propuso discutir quien era ese funcionario que legítimamente debía á su vez sustituir al C. Azamar, y resuelve la cuestion en favor de aquel que despues de este ciudadano haya obtenido mayoría de votos en las elecciones celebradas en Cosamaloapan el mes de Diciembre de 1865. En esta comparecencia que obra á fojas 631 del expediente, se descubre la intencion muy marcada de que los autos vayan al conocimiento del ciudadano Buenaventura Vidal, y en ningun modo al C. José Joaquin Ocampo, defendiéndose esto con decidido empeño, tanto mayor, cuanto que una vez nombrado no hubiera sido fácil á la parte de Senties recusarlo, por su mismo carácter de Juez Ejecutor. Mas adelante veremos descubierto el objeto que se llevaba en esa decidida oposicion, y la conducta final que observó la parte de Ahuja respecto de él. En 20 de Enero del referido año, pasaron los autos como deseaba la parte de Ahuja, al Juez Buenaventura Vidal, y se previno se hiciera saber al C. Senties la radicacion de los autos. (fojas 637.)

En 25 del mismo, y á peticion de este, el Juez Vidal mandó pasara el expediente al ciudadano Administrador de Cosamaloapan, para que procediera á hacer la liquidacion del comiso, segun estaba mandado en la sentencia de revision.

Al llegar á este punto del expediente, parece se habian agotado ya todos los subterfugios; que el actor veria muy presto premiada su constancia y energía, y que presto tambien serian cumplimentados los respetables fallos de la justicia nacional, expresados por el órgano de autoridades legítimas; pero aun todavía se hace esperar demasiado este desenlace.

Luego que se le notificó á la parte de Ahuja que los autos de comiso estaban en poder del C. Juez Vidal, y que éste funcionario habia mandado pasarlos al Administrador de rentas de Cosamaloapan para la

liquidacion de que se ha hablado antes, le ocurrió pedir aclaracion de la superior sentencia pronunciada por el Tribunal Superior. Funda su solicitud, 1º; en que las costas están abolidas por el final del artículo 17 de la Constitucion, y 2º; en que habiendo confirmado dicha sentencia la del inferior en todas sus partes, y mandando este que la tasacion se hiciera por peritos, y la del Tribunal Superior que se practicara por el Administrador de la aduana; al notificado le parecia que en eso habia alguna confusion ó ambigüedad; por lo que debía de pedirse aclaraciones al Magistrado que pronunció la segunda sentencia (fojas 639.)

La providencia que recayó á la anterior comparecencia, fué en abstracto la siguiente: Que sin perjuicio de las razones expuestas por la parte de Ahuja sobre el punto de costas y liquidacion del comiso, se llevara adelante el auto del día anterior, por el que se mandaba remitir el expediente al Administrador de rentas, para los efectos que expresa la Superior sentencia de 30 de Noviembre varias veces citada (fojas 639 vuelta.) En la misma fecha, pasaron de hecho los autos al Administrador.

En 28 de Enero pidió el Juzgado actuante al Tribunal Superior las aclaraciones que la parte de Ahuja demandaba; fojas (640.)

En 15 de Febrero del mismo, el Administrador de Rentas devolvió el expediente al Juzgado de su origen.

El suscrito, por el mismo honor del foro, no quiere creer que la providencia que figura á fojas 649, sea una medida de prudencia y de precaucion; si esto fuera así, sería la prueba mas incontestable de malicia y temeridad; por ella se ordena, que sin embargo de haber pedido la parte de Ahuja se le entregara el expediente, para confrontar si estaba ó no bien hecha la regulacion de costas, no se extrajera del Juzgado sino que la parte misma concurre á este lugar donde tendrá de manifiesto los autos des

de las once de la mañana hasta las cinco de la tarde por el término de cinco días.

La parte de Ahuja parece contrariada, é insiste en que se le entregue el expediente para verlo fuera del Juzgado, como también en que el término de cinco días es muy corto.

El Juzgado por equidad, manda ampliar dicho término hasta otros tres días mas; pero negándose abiertamente á la entrega de los autos, (interlocutorio de 20 de Febrero de 1866, fojas 649.)

Espirado dicho plazo, la parte de Ahuja intenta un nuevo artículo con calidad de previo y especial pronunciamiento, acerca de la legalidad de las costas y personas á quienes hayan de pagarse; el Juzgado mandó en vista de él, se diera cuenta á la Superioridad; pero que sin perjuicio de lo que ésta dispusiera, se continuaran los trámites hasta la final conclusion de la sentencia definitiva pronunciada por la misma.

En 2 de Marzo de 1866, el Juzgado mandó prevenir á las partes, nombrasen un perito avaluador cada una (fojas 52 vuelta.)

Notificado este auto á la parte de Ahuja, insiste en que ha promovido un artículo de previo y especial pronunciamiento, y en su concepto, debió haberse decidido con acuerdo de asesor, por ser un punto de derecho, sin necesidad de ocurrir al Tribunal Superior, tanto porque en concepto del promovente terminó su jurisdicción, como porque en ningún caso el referido Tribunal podía sor asesor del Juzgado consultante, y se expaya en pretextos para desembarazarse del perito Juan Mora nombrado por Senties. En esta comparecencia, llama la atención el empeño de Ahuja para que el expediente se extraiga del Juzgado, y á lo que éste se volvió á negar redondamente; pero mandand que se lo presente todas las veces que quiera, y fijando la audiencia del día 7 de Marzo á las doce, para que las partes presenten sus respectivos peritos.

La parte de Ahuja entonces alega un nuevo motivo para recusar al Juez Vidal,

pues dice: que por noticias vagas ha sabido que tiene interés en el pleito. Ofendida así la delicadeza del Sr. Vidal, manifiesta que salvando su responsabilidad como ministro ejecutor, ningún interés tiene en proseguir conociendo y manda que el expediente se pase al C. Lic. Tiburcio Montiel en calidad de asesor, para resolver sobre la recusacion que le hizo el apoderado de Ahuja.

El asesor por su dictamen que obra á fojas 661, aconseja, que se deseché la recusacion como un recurso improcedente, puesto que siendo únicamente Juez ejecutor y por lo mismo no ejerciendo acto alguno jurisdiccional, no debe darse por recusado ni eximirse de seguir actuando en el negocio; que en caso de presentarse algunas excepciones legítimas, cuide de no resolverlas por sí mismo, sino que las remita al Tribunal Superior para su sustanciacion y resolucion; y por último respecto de los peritos, que si bien son recusables por ausiliar en actos de jurisdicción, debe entenderse de la recusacion legal y no de aquella que se interpone de una manera maliciosa con el fin de alargar el pleito. El Juzgado, deferente en todo, mandó se procediera de conformidad con lo dictaminado por el asesor. Notificado este auto á la parte de Ahuja, apeló de él para ante el Ministro Superior de Justicia, protestando además sobre la competencia del Juez ejecutor que actúa en este negocio, declinando su jurisdicción y amenazándole con acusarlo ante la superioridad, y exigirle la responsabilidad por sus actos. En esta comparecencia, el comparente se extiende de un modo muy ajeno de esta clase de diligencias, fundando la recusacion del Juez Vidal, y de paso recusa también al asesor Lic. Montiel y esto después de pronunciada la sentencia. Manifiesta igualmente, que la de 30 de Noviembre adolece de error, respecto del punto de costas, y sobre todo esto insiste en que se forme artículo de previo y especial pronunciamiento.

El Juez, entonces, por su auto de 6 de Abril del citado año de 866, se creyó en el deber, por tratarse de puntos de jurisdicción, como son el recurso de apelación del auto en que se declaró sin lugar la recusación y la declinatoria de jurisdicción, se forme artículo sobre ambos puntos.

En 30 de Abril se decidió el artículo por el fallo pronunciado á fojas 669 vuelta, declarándose admitida la apelación tan solo en el efecto devolutivo, y sin lugar al de declinatoria de jurisdicción; y que se lleve adelante el de 31 de Marzo último, relativo á la presentación de peritos.

Mas la parte de Ahuja, fecunda para inventar medios por los cuales pueda dilatar la ejecución de un fallo que tarde ó temprano ha de resentir, sorprendió la integridad y buena fé del Magistrado del Tribunal Superior con un falso informe; pero que dió por resultado, el que esta autoridad hubiera prevenido al inferior, le remitiera los autos originales ó un testimonio, segun su estado, y mandándole nuevamente que en cuestiones de derecho no resolviera sin acuerdo de letrado.

La falsedad del informe de Ahuja resalta á la vista, de la simple lectura de los autos, pues como ya se ha dicho, el Juez resolvió el artículo con consulta del Lic. Tiburcio Montiel.

A fojas 681, se encuentra un oficio dirigido por la comandancia militar del canton de Cosamaloapan al C. Lic. José M. Rodriguez, para que este se encargue del conocimiento de este negocio, por ser el llamado por la ley como juez sustituto del de 1ª instancia. La parte de Ahuja hace observar en su respectiva notificación, que el referido Lic. Rodriguez, no puede funcionar como juez en este asunto, por ser hermano del que en el mismo obra como apoderado de Ahuja.

El Sr. Rodriguez, como era natural, se dió por recusado, y mandó se pasara el expediente á la Comandancia militar, por ig-

norar si el juez D. Buenaventura Vidal, se habia recibido del juzgado 2º local.

Entonces la Comandancia militar, en vista de aquel parentesco, libró oficio al C. Silverio Vidal, para que con arreglo á la ley, sustituyera á Rodriguez, conociera en este negocio y le acompañe el expediente. En este oficio manifiesta la Comandancia militar que ha prorogado por dos meses mas la licencia concedida al C. Buenaventura Vidal. En vista de este oficio, el Juez, Silverio Vidal, pronunció un auto, (fojas 622) encargándose del conocimiento del negocio, manda sustanciar el artículo de recusación del Juez Buenaventura Vidal; como era natural, la parte de Senties hizo presente, que puesto que dicho señor estaba ya separado del conocimiento del negocio, era estéril ocuparse mas del artículo de recusación; que por lo mismo pedia se ocupara el juzgado del asunto principal, á saber, del cumplimiento y ejecución de la sentencia definitiva de 30 de Noviembre de 865.

Por el auto de 28 de Julio, fojas 686 vuelta, y atentas las razones que en él se expresan, el Juez actuante mandó revocar por contrario imperio, el que se habia pronunciado con fecha 7, mandándose sustanciar el artículo de recusación del C. Buenaventura Vidal, y ordena al mismo tiempo á las partes, nombren sus respectivos peritos avaluadores.

En este punto del expediente, el suscrito encuentra una constancia que pone de manifiesto y revela por completo la mala ley con que la parte de Ahuja ha procurado portarse en este negocio, luego que fué vencida dos veces ante los Tribunales. Esta constancia obra á fojas 687 del expediente. Es la respuesta que el honrado Juez Buenaventura Vidal, da al oficio que con fecha 14 de Julio de 866, le dirigió la Comandancia militar de Cosamaloapan. Aquí se pone de manifiesto la versatilidad del apoderado de Ahuja, y las grandes consecuencias en que incurre aun consigo mismo, luego que los resultados no corresponden



á sus esperanzas. El suscrito no entra al exámen particular de esta pieza, por no hacer mas difuso el presente dictámen.

Parce increíble tanto cinismo, pero ello es así; la parte de Ahuja recusa tambien por falta de jurisdiccion al C. Silverio Vidal, fundándose en el escrutinio de la eleccion de jueces, y siguiendo siempre su táctica favorita de agraviar á las autoridades y saherir su delicadeza, para que ya estas ofendidas en su honor, se inhiban voluntariamente del conocimiento de este negocio.

Por la inhibicion de este Sr. volvieron los autos á la Comandancia militar, siendo de notable este auto por no haber testigos que lo autoricen en razon de que, los que estaban funcionando se excusaron de seguir actuando, temiendo incurrir en una responsabilidad, por las largas y difusas comparrecencias que ponía el apoderado de Ahuja.

Aquella autoridad, por su oficio fecha 2 de Agosto, nombró al C. Ramon Murugarren, tambien Juez sustituto de 1ª instancia, para que conociera de este negocio: ¡Vana determinacion! el apoderado de Ahuja apela á un nuevo recurso y hace que el anciano Juez Murugarren se excuse de conocer temiendo sufrir vejaciones y molestias inmerecidas y demasiado sensibles para su avanzada edad. El Sr. Murugarren, se dirige en este oficio en que pide se le tenga por inhibido, al Ministro Superior de Justicia.

Indignado el Tribunal con la conducta altamente reprobada de Ahuja, pronunció el auto que obra á fojas 694, su fecha 11 de Agosto de 866; en él se previene al inferior que para mejor proveer se prevenga al apoderado de Ahuja exprese clara y terminantemente si recusa inhibitoriamente á dicho Juez. El Tribunal tenía razon; el apoderado de Ahuja no se habia explicado de una manera franca y leal al hacer la recusacion del Sr. Murugarren. Tambien manda el Tribunal en ese auto, en caso de recusacion efectiva, se sustancie el recurso llenando los requisitos que establece el ar-

tículo 10 del decreto de 21 de Junio de 1848 y calificado el grado con consulta de asesor, haga la remision de los autos á la superioridad.

Inútil sería decir, que el apoderado de Ahuja se aprovechó de la oportunidad, y expresó que recusaba inhibitoriamente á Murugarren. ¿Y se desca sabor cuál es la causa que el apoderado de Ahuja alega para recusar al Sr. Murugarren? Oigámosla: bien que hasta rubor dá estamparla; porque dice el apoderado de Ahuja: Murugarren vive públicamente solo con una de mis sobrinas, María de la Luz Rivera!!

Es cierto que en este escrito, el dicho apoderado se muestra indignado de esa conducta, lo que templa en alguna manera lo bastardo de esa revelacion íntima de familia.

El Sr. Murugarren por su auto de 17 de Agosto, fojas 700 y 704, se excusa por completo de conocer en semejante negocio.

Por la excusa del C. Murugarren entró el C. Vicente Calvo, nombrado por la Gefatura política y militar del Canton de Cosamalopan.

El C. Juez Vicente Calvo, por su primer auto fecha 21 del citado Agosto, mandó pasar los autos al C. Lic. Pablo Pantoja, con el carácter de asesor, para que dictaminara sobre el punto que desde hace tanto tiempo se venia ventilando; el punto de recusacion del Sr. Murugarren.

Pero aquí fué donde el apoderado de Ahuja hizo el último esfuerzo: agotadas sus fuerzas, fatigada sin duda su inteligencia á fuerza de inventar recursos para demorar este negocio y arrojar en cada notificacion ó diligencia un nuevo obstáculo que entorpeciera la marcha de la justicia, concluye recusando al Lic. Pablo Pantoja, y con él á todos los abogados de Oaxaca. ¿Habrás visto en los anales del foro semejante manera de recusar?

El Juez Calvo, no encontró sin embargo, justo, arreglarse al dictámen del Lic. Pantoja, y por su auto de 4 de Setiembre de 866,

mandó se elevaran de nuevo los autos al Tribunal Superior, para que determinase si se debía ó no conformar con dicho dictámen, ó debía de pasar el expediente á otro asesor.

La parte de Senties creyó ver en este auto un procedimiento ilegal, bastante para acusar al Juez que lo dictó y exigirle responsabilidad. El apoderado de Ahuja se contentó con pedir pasara el expediente á otro abogado en consulta, ó se le admitiera la apelacion que introducía de dicho fallo. Pero en otra comparecencia que puso Senties, apela tambien, y pide la remision de los autos al Tribunal Superior. Mas luego Senties se desiste de la apelacion que habia interpuesto, y manifiesta estar enteramente de acuerdo en que los autos se eleven al Tribunal Superior, para los efectos que expresa el auto de 4 de Setiembre, antes citado.

Para sustanciar este artículo interpuesto por la parte de Senties, mandó correr traslado á la de Ahuja. Y sin embargo, aun todavía se hallaron nuevos pretextos. En esta ocasion sirvió, el que como Senties se desistió de la apelacion, el apoderado de Ahuja exigia que antes de remitirse los autos al tribunal, se le satisficieran por la parte de Senties los honorarios que habia devengado por el escrito de contestacion á la pretension de Senties; el juez decidió, que este era un punto de derecho que no debía decidirse sin consulta de asesor, y nombró para este efecto al C. Lic. Dometrio Osio. Respecto de este nombramiento tambien hubo varias contradicciones, que revelan el ánimo de vejar á la parte de Senties.

En este estado, el Tribunal Superior libró su oficio de fecha cinco de Noviembre en que previene al inferior, que sin pretexto ni excusa, y en caso necesario, recogíendola de la persona en cuyo poder está, le remita á precisa vuelta de correo la segunda pieza de este expediente. El inferior cumplió con esta orden al dia siguiente.

Recibidos los autos por el Tribunal Su-

perior, pronunció su fallo de 7 de Enero de 1867. Este auto se hace notable, porque revela el celo por la recta administracion de Justicia que anima á su autor. El Tribunal se indigna y con razon, del escandaloso proceder de los funcionarios inferiores, cuyo escandaloso abuso, dice, ya es tiempo de corregirse; no menos que contra los recursos tan ilegalmente introducidos por las partes con el mas descarado desprecio de leyes y doctrinas precisas y terminantes. El Tribunal, despues de rebatir en los considerandos de este fallo, todas y cada una de las razones, ó por mejor decir, pretextos que se pusieron en juego para entorpecer el cumplimiento y ejecucion de la superior sentencia ejecutoria de 30 de Noviembre de 1865, manda por último y resuelve los puntos siguientes:

Primero: que se lleve á puro y debido efecto la relacionada sentencia, bajo la mas estrecha responsabilidad del Juez executor.

Segundo: que á este efecto y previa tasacion de costas, se devuelva todo el expediente al Juez 2º de paz de Cosamaloapan, en atencion á estar legalmente impedido el Juez 1º y de primera instancia de este Canton, C. Buenaventura Vidal, á fin de que previa la fianza respectiva que debió otorgar la parte de Senties, proceda á hacer efectiva la superior sentencia mencionada, previniéndole expresamente no admitiera á las partes respuesta ni recurso alguno que tendiera á entorpecer el cumplimiento aquí mandado; y por último, proviendo el Tribunal que acaso seria necesario trabar ejecucion en bienes de Ahuja, y estos se hallaban ubicados en la hacienda de la Estanzuela, donde no habia ninguna autoridad apta á quien poder dirigir el exhorto respectivo, y en atencion á que dicha hacienda se halla en jurisdiccion del Tribunal que provee, queda autorizado el referido Juez 2º de paz, para pasar por sí mismo á la Estanzuela y hacer efectiva su comision.

El Juez á quien tocó dar cumplimiento á la providencia que se acaba de referir,



fué el C. Cecilio G. Avila, que á la sazón funcionaba con el carácter de 2º de paz y accidental de primera instancia.

Notificado á la parte de Ahuja el último fallo del Tribunal Superior, lejos de abstenerse de poner comparecencias difusas, extiende una, tan larga, que el Juez tuvo que llamarle por eso la atención. En esta diligencia, la parte de Ahuja insiste en que hay falta de jurisdicción en el Juez 2º de paz del Canton de Cosamaloapan para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior. El Juez, sin embargo, expresamente se declaró competente en su auto de 19 de Enero de 867. Las razones en que se funda este fallo son demasiado atendibles, y justifican la jurisdicción de que dicho Juez se halla investido, y para el caso que se discute, aun mas que suficiente. El Juzgado por equidad le repite á Ahuja nombre su perito, y le fija día para esto.

La parte de Ahuja se muestra rebelde, y por su rebeldía, previo acuse, se le manda, que si en el acto de la notificación no nombra su perito, lo verificará el Juzgado de oficio, y que respecto á la pretensión que manifiesta, de que antes de ningún otro procedimiento, se proceda al otorgamiento de la fianza, no ha lugar.

Por fin, la parte de Ahuja nombró también su perito, al C. Luis E. Echagaray.

Habiendo impugnado la parte de Ahuja la liquidación hecha por el Administrador de Rentas, en 6 de Febrero de 866, después de algunos debates, se pronunció el auto de 15 de Marzo de 867, por el que se declara firme y validera aquella liquidación, y sin ningún efecto las observaciones que le hizo el apoderado de Ahuja. Este pide entonces, que ese auto se revoque por contrario imperio, fundándose en que la liquidación está hecha contra ley expresa, y que en caso de no admitírsele la revocación, se le admita la apelación del auto. El Juzgado, no encontrando razón legal para revocar su providencia, admite la apelación, pero solo en el efecto devolutivo: mandan-

do se le libre el testimonio correspondiente, si lo pidiera el promovente, y señalándole el término legal para presentarse ante el Superior, mejorando la apelación.

Habiendo presentado Senties la fianza que se le previno por el Tribunal Superior, fué argüida de ineficaz por la parte de Ahuja, y entonces el Juez mandó sustanciar un artículo especial, para que en juicio contradictorio se esclareciera la suficiencia de dicha fianza.

Como ya se ha dicho, el auto de 15 de Marzo de 1867, fué apelado por la parte de Ahuja, y por otro fallo, pronunciado el día siguiente, se concedió la apelación, pero solo en el efecto devolutivo; Ahuja se opuso á ello, y después de lo contestado por Senties, se determinó calificar el grado con acuerdo de Asesor; Senties no creyó conveniente insistir en su pretensión; y á consecuencia de esto, se pronunció el auto de 6 de Abril, que dispone se admita en sus dos efectos la apelación interpuesta del fallo de 15 de Marzo de 867, remitiéndose los autos al Tribunal Superior. Y sin embargo de estar ya así satisfechos en este punto, los deseos del apoderado de Ahuja, insiste en que el grado se califique por Asesor, dando por disculpa de su tenacidad, que el abogado en su dictámen, dirá ante todas cosas, como eran nulas las diligencias practicadas en esta causa por el Juez 2º de paz, puesto, continúa diciendo el apoderado de Ahuja, no podrá desentenderse de los fundamentos que repetidas veces le he hecho valer, aunque sin fruto, respecto de la bien conocida parcialidad del Juez, hácia la parte de Senties. En esta comparecencia, y á pesar de lo expresamente mandado en el auto de 6 de Abril, se toma la libertad de marcar al Juzgado un nuevo Asesor, al C. Lic. Fernando de Jesus Corona de Córdova, para que, con su consulta, se determine el grado de la apelación.

El Juzgado de Cosamaloapan, proveyó como debía hacerlo: "Estese á lo mandado," fué la contestación que dió á la referida

comparecencia. El apoderado de Ahuja, contestó con su respuesta favorita, á saber: que lo oye con las protestas que tiene emitidas sobre jurisdiccion y nulidad.

El artículo que se mandó abrir para esclarecer el punto de eficacia de la fianza presentada por Senties, terminó por probarse que en efecto era ineficaz, por cuyo motivo, la fianza quedó de hecho retirada.

Después de varias diligencias que se fueron sucediendo, por fin, el apoderado de Ahuja convino en que se remitiesen al Tribunal Superior los autos en apelacion, y en sus dos efectos, del auto de 15 de Marzo, cuya decision estaba pendiente, y por el que se declaró firme y valedora la liquidacion de comiso, hecha por el Administrador de Rentas. El Juzgado de Cosamaloapan, proveyó de conformidad, y los autos fueron de hecho remitidos á la Superioridad, en 1.º de Abril de 1867.

El suscrito, al llegar aquí, manifiesta al Tribunal que le ha costado no muy poco trabajo, ir coordinando la tramitacion del negocio, segun la manera revuelta y complicada con que está formado el expediente.

Como quiera que el Juzgado de primera instancia, por su auto de 26 Enero de 866, siguiera la tramitacion regular del negocio, para hacer efectivo el superior auto de revision de 30 de Noviembre de 865, sin perjuicio de lo que el Tribunal Superior dispusiera respecto de la aclaracion de esa misma sentencia, solicitada por la parte de Ahuja, no debe hacerse extraño que en la tercera pieza de estos autos, figure la sentencia que decidió el punto de nulidad, fechada en 8 de Enero de 1867. En esta pieza, se ventila solamente el punto de nulidad, ante el Tribunal Superior del Estado de Veracruz; de sus constancias aparece, que si bien es cierto que en 23 de Febrero de 1866, el apoderado de Ahuja interpuso el recurso de nulidad de la sentencia pronunciada en el juicio principal con fecha 30 de Noviembre de 1865, tambien lo es, que á consecuencia de la invasion extranjera, que

obligó al Magistrado del Tribunal Superior, á salir violentamente para San Andrés Tuxtla, el recurso quedó paralizado, y no pudo volver á continuar su curso, sino hasta el mes de Diciembre del mismo año, en que con fecha 10 aparece un escrito del apoderado de Ahuja, refiriéndose al de 23 de Febrero. Entonces ya sustanciado el recurso, se pronunció la superior sentencia que obra á fojas 10 vuelta de la tercera pieza de los autos. El Magistrado del Tribunal Superior, se apoya en muy sólidos fundamentos, para que debiera, como él mismo dice, declarar inadmisibile el recurso de nulidad; pero luego añade, que no queriendo dejar absolutamente indefensa á la parte de Ahuja, y que no crea que por parte de este Tribunal existe alguna prevencion, por equidad, y solo en cuanto hubiere lugar en derecho, le admite el relacionado recurso.

Notificado este auto á la parte de Ahuja aún todavía encuentra pretextos para eludir la ejecucion de esta sentencia, y logró que los autos vuelvan al Tribunal Superior, pero en esta vez, como ya en otras, se le impuso un sério extrañamiento, ya por las frívolas razones que alegaba, como por el modo poco respetuoso con que se expresaba acerca del mismo Tribunal. Está por demas decir, que en el auto que pronunció el C. Magistrado, con ocasion de estas observaciones, previene de nuevo al inferior, que sin excusa ni pretesto, proceda á cumplir lo que tantas veces se le tiene mandado sin admitir á las partes, respuestas ni recursos impertinentes, que tiendan á entorpecer el curso y término de este envejecido negocio.

Pasémos ya á la cuarta y última pieza de este fastidioso expediente. Este cuaderno, se ocupa exclusivamente, de la apelacion interpuesta por la parte de Ahuja, del fallo pronunciado en 15 de Marzo de 1866, por el Juez 2.º de paz de Cosamaloapan, y que se refería, como se ha dicho antes, á declarar firme y valedora la liquidacion del comiso introducido por la casa de comercio

“Miranda y Compañía.” De lo actuado en él aparece, que en 1º de Junio de 867, se presentó el apoderado de Ahuja ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, pidiéndole que para acabar de sustanciar el recurso de apelacion, se libre orden á D. Pablo Senties, para que entregue el expediente que tiene en su poder. El Tribunal, deferente con esta petición, libró la orden que solicitaba. Despues de varias oposiciones, por la parte de Senties, y de las diligencias á que ellas dieron lugar, por fin entregó el expediente compuesto de tres cuadernos.

Hasta aquí el Tribunal Superior del Estado de Veracruz, habia funcionado en calidad de Tribunal de la Federacion; pero con fecha 3 de Setiembre del citado año de 67, el Tribunal declara: que estando ya instalados los Tribunales de la Federacion, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Circuito, se reservan estas diligencias para dar con oportunidad cuenta de ellas, al Tribunal de Circuito á quien corresponde

Con fecha 7 de Noviembre del citado año, el Juzgado de Distrito de Veracruz, reclamó al Juez de Cosamaloapan el expediente relativo al comiso denunciado por D. Pablo Senties; y el Juzgado requerido contestó, que dicho expediente estaba en poder del Tribunal Superior. El Juzgado de Distrito apoyaba su competencia en la naturaleza misma de este negocio. En 11 de Enero del año próximo pasado, dicho Juzgado se dirigió ya directamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con la misma solicitud con que se habia dirigido al Juez de Cosamaloapan.

El Tribunal Superior entonces, poniendo en ejecucion su auto de 3 de Setiembre de 67, mandó remitir los autos directamente al Tribunal de Circuito, disponiendo se notificara esta providencia, tanto al Juzgado de Distrito que lo habia requerido, como á los interesados; previniendo, que su secretaría cuidase de remitir el expediente, luego que la parte promovente situara los fon-

dos necesarios para la remision por el correo.

En 7 de Mayo, el Promotor fiscal presentó dictámen al Tribunal Superior local, á fin de que se requiriese al legítimo apoderado de Ahuja, que en su concepto lo es el escribano público D. Miguel A. Valdes, para que pague el porte del correo, para la remision de los autos al Tribunal de Circuito residente en Puebla; pues es á quien corresponde de derecho, el conocimiento y fallo del incidente de apelacion de que se viene tratando. El Tribunal Superior de Justicia decretó de conformidad respecto del requerimiento que debia de hacerse al C. Miguel A. Valdes, reservándose proveer despues, acerca de lo demas que correspondiera en derecho.

En 17 de Junio, compareció el C. Miguel A. Valdes, manifestando: que aunque apoderado general de D. José Antonio Ahuja, con cuyo carácter habia intervenido en estos autos en la primera instancia desde Diciembre de 1862 á la fecha, ignora lo que se haya hecho en ellos, ni tiene instrucciones de su poderdante, referentes á este negocio, por lo que pide, que antes de hacer efectivo en él la citacion que se le manda hacer, relativa á que con él se entienda la providencia dictada, acerca de la remision de los autos al Tribunal de Circuito de Puebla; ó se le entreguen dichos autos, por un breve término, para imponerse de ellos; ó se le permita pedir instrucciones á su poderdante. El Tribunal proveyó el auto siguiente: “Atendido el estado de este negocio, no ha lugar á lo que se solicita, y estése á lo mandado.” En la misma fecha, y previa citacion, el Promotor fiscal, hizo presente, que en atencion á que la parte de Ahuja, no se prestaba á expedir la dicha remision, porque no le convenia la pronta conclusion de este negocio, pedia se remitiesen de oficio, con calidad de que oportunamente se determine, quién es el responsable del porte, para que sea satisfecho. El Tribunal proveyó, que sien-

do ilegal la petición del Promotor fiscal, para que la remisión de los autos se hiciera con el carácter de Oficio, no había lugar á ello, por ser un negocio de parte, y que en consecuencia, se estuviera á lo mandado en el Superior auto de 5 de Marzo último; previniendo á D. Miguel A. Valdes, que si para el día siguiente, 7 de Julio, no cumplía con lo que estaba dispuesto, se procedería con arreglo á la ley.

El certificado expedido por el O. Lic. Ramon María Núñez, Juez de Distrito del Estado de Veracruz, nos pone al tanto del resultado que tuvo la apelación intentada por Ahuja. El Tribunal de Circuito de Puebla después de muy detenidos y sólidos considerandos, confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada por el Juez 2º de Cosamaloapan, en 15 de Marzo de 1867, que declaró firme y valedera la liquidación practicada por la Aduana de esa población, condenando á la parte de Ahuja á las costas que legalmente deben cubrirse en esta instancia, y que á su costo se haga la remisión de ellos al Juzgado de Distrito de Veracruz, con testimonio de esta sentencia para su ejecución.

Este mismo certificado nos pone en conocimiento otro incidente de no poca importancia, á saber: el juicio verbal que se celebró ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, con motivo del secuestro de la hacienda de la Estanzuela, hecho á D. José Antonio Ahuja, y á favor del O. Pablo Senties á fin de precaverlo de cualquiera eventualidad en caso de triunfar por completo en este negocio. La resolución de la sentencia que dió fin á dicho juicio, resuelve estos dos puntos: Primero: Que se declare subsistente el embargo de la hacienda de la Estanzuela, ordenado en auto de 6 de Julio y modificado por el de 11 de Setiembre de 69, que redujo el secuestro á los terrenos de dicha hacienda; y segundo, que el pago de las cuentas del depositario y Juzgado de Tlaliscoyan, que de Orden judicial hizo interinamente D. José Antonio

Ahuja, serán indemnizados por D. Pablo Senties, en caso de obtener sentencia favorable en el recurso de nulidad pendiente, ó si de cualquiera otro modo mejora de fortuna. El Promotor fiscal, en vista de este fallo, manifestó que era necesario se agregaran á los autos principales copia autorizada de todas estas diligencias, á fin de que la Suprema Corte de Justicia tuviera conocimiento de la referida sentencia ejecutoriada sobre la liquidación de comiso practicada por la Aduana de Cosamaloapan, juicio verbal sobre el secuestro provisional de la hacienda de la Estanzuela, y providencia que á él recayó. Proveyo de conformidad, se cerraron las actuaciones para hacer la remisión á la respectiva autoridad.

Como se vé de tan largo extracto, y el que procuró el suscrito acortar en cuanto le fuera posible, no deja la menor duda de que se han puesto en juego todo género de medios que el derecho concede para proteger á la inocencia; pero que en el presente negocio han servido precisamente para lo contrario, puesto que, á merced de esos mismos recursos, la justicia se ha encontrado hasta hoy impotente para hacer efectivo su indeclinable fallo.

Fijados así los puntos de hecho mas prominentes, y que de autos constan, resta ya tan solo ocuparse de la cuestión legal á que dá lugar el recurso de nulidad, único pendiente de resolución y para la que, después de un procedimiento tan dilatado como tortuoso, en el que las excusas y recusaciones se suceden casi con prodigalidad, en que la dignidad de los Tribunales ha sido repetidamente ajada por las partes, hasta el grado de quejarse de ellos los mismos jueces; en que las inconsecuencias las y faltas pudieran contarse por las diligencias que figuran en el abultado expediente; ha tenido por fin este negocio, el honor de llegar al conocimiento de esta Corte Suprema de Justicia, último atrincheramiento á donde ha venido á refugiarse la injusticia, sostenida tenazmente con todo el empeño y de-

cision que la mejor de las causas mereciera. El fiscal en este punto será muy breve, pues son muy sólidas y fundadas las razones en que se defiende por sí misma la sentencia de 30 de Noviembre de 1865, y cuya nulidad se pretende.

Como ya se ha dicho, ésta se hace consistir en la aclaracion que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, funcionando como de Circuito, hizo de la sentencia que este mismo pronunció en 30 de Noviembre de 1865 y cuya aclaracion consta en la comunicacion de 13 de Febrero de 1866, pues que, se dice que por ella la sentencia de vista no fué conforme de toda conformidad con la de primera, incurriéndose en un error respecto de las costas. La parte de Ahuja protesta tambien contra la jurisdiccion del Juez 2º de paz de Cosamaloapan, y por último se dice, que la sentencia se pronunció por falsos testigos; causas todas que en efecto justificadas, hubieran producido el objeto con que se propusieron. Pero como se ha repetido varias veces en el curso de este escrito, esas faltas no existen como se pasa á demostrar.

Mas antes que esto, es preciso decir, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que el recurso de nulidad no se alegó en tiempo legítimo, sino que se dejaron pasar dos meses veinticuatro dias para interponerlo, sin que baste para subsanar esa falta, la razon que alega la parte de Ahuja, de que el tiempo debía comenzarse á contar desde el dia de la aclaracion, y no el de la notificacion de la sentencia; 1º porque expresamente está mandado que el término de ocho dias que para alegar de nulidad se concede, se comience á contar desde el dia de la notificacion de la sentencia; 2º porque bien manifesto está de las actuaciones, que en el término legal no se tuvo la intencion de interponer tal recurso, sino que ocurrió hasta mucho despues; ya porque el que luego se interpuso fué el desconocido de "reclamacion por ser extranjero," como tambien dentro de los ocho dias

legales, no se hizo ninguna protesta ó indicacion sobre que no corriera el término mientras estuviera pendiente la aclaracion que se solicitó del Tribunal Superior, y últimamente, porque esa aclaracion se dirijia, no al esclarecimiento del punto principal, cual era el comiso, sino acerca de un incidente ó accesorio, como era el de costas. De donde resulta, que esa misma aclaracion que se pide, es la prueba mas palpitante de que por la parte de Ahuja, se consintió la sentencia del Tribunal Superior en su parte sustancial, y esto se ve de tal modo confirmado, que no se dará una sola diligencia practicada despues del 30 de Noviembre de 1865, por la parte de Ahuja, que se dirija á protestar contra lo sustancial de aquella sentencia. En consecuencia, la parte de Ahuja no puede justificar que el recurso de nulidad lo interpuso en tiempo oportuno, y por lo mismo debe declararse que la referida sentencia de 30 de Noviembre de 1865 adquirió toda la fuerza y validez de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Minado así por su base el recurso de nulidad intentando, todo cuanto se diga de mas, será para mayor abundamiento y en plena justificacion de la legalidad del proceso. La parte de Ahuja, alega que es nula la sentencia; porque en la aclaracion del Tribunal Superior de 30 de Noviembre, impone á Ahuja la obligacion de pagar unas costas que en justicia no las debe: desde luego se fundó en que las costas estaban prohibidas por un artículo Constitucional; pero el Tribunal Superior acompañó en justificacion copia de la Suprema disposicion de 27 de Noviembre de 1865, dictada por el General en Jefe del Ejército de Oriente, la que refiriéndose al decreto núm. 2 de 28 de Mayo de 1864, autoriza á todos los empleados del poder judicial del Estado, para cobrar costas. Esta legalidad fué reconocida por el mismo promovente, como se infiere con toda claridad del párrafo 4º del escrito que el apoderado de

Ahuja presentó en 23 de Febrero de 866 y está visible á fojas 4 y siguientes, de la tercera pieza de estos autos.

Tampoco puede decirse, que haya discrepancia entre las sentencias de primera y segunda instancia, porque la de segunda añadió que la liquidacion se hiciera por el Administrador de rentas de Cosamaloapan con arreglo al artículo 68 de la Pauta de Comisos; porque esto, lejos de ser una reforma en lo sustancial, solo manifestó quién era la persona llamada por la ley para hacer esa liquidacion; cosa que aun cuando no se hubiera especificado por el Tribunal Superior, ya los litigantes debieran saberlo por estar determinado por una ley anterior; y ademas, que esta circunstancia envuelve en sí misma la confirmacion de la sentencia del inferior, en que declara: que los efectos decomisados se valuarán por peritos. Como dice el Tribunal Superior, al hacer la aclaracion sobre quién debía hacer la liquidacion y distribucion, no llevó mas objeto que evitar los entorpecimientos que pudieran ofrecerse en esas operaciones, sujetando á las partes á un precepto legal.

Con esto pues, queda demostrado que la sentencia de segunda instancia fué redactada con tal oscuridad, que no pudiendo ser comprendida por las partes, inducen á nulidad.

Estando mandado por el artículo 134 de la ley de 16 de Diciembre de 1853, que es la que ha servido de fundamento para el presente caso, como tambien por el artículo 136 de la de 29 de Mayo de 1837, que ni la condenacion de costas, ni ninguna otra demostracion de igual naturaleza, pueda decirse opuesta á la conformidad de la sentencia del inferior, es claro que las aclaraciones hechas á la Superior sentencia de 30 de Noviembre de 1865, no puede decirse la hayan dado una diferencia intrínseca con la de primera instancia.

Por último, el fiscal ha examinado detenidamente ambas sentencias, y no encuentra ninguno de los defectos que nuestra le-

gislacion actual marca, para decir de nulidad de una sentencia; porque si bien es cierto, que por disposiciones antiguas se daba ese recurso por diversos motivos, al de haberse faltado á las leyes que arreglan el proceso, como por ejemplo la incompetencia de Juez y otros de ésta naturaleza, en el dia no se puede interponer, sino contra sentencia que cause ejecutoria, y eso por haberse faltado á las leyes que arreglan el procedimiento. Por lo mismo, si bien en estos autos se notan grandes irregularidades, no son de aquellas que afectan directamente la esencia del juicio.

El apoderado de Ahuja, en su comparecencia de 15 de Enero de 1867 á fojas 16 vuelta del cuaderno tercero, se apoyó en definitiva para justificar su pretencion de instaurar el recurso de nulidad en este complicado negocio, en el texto de la ley 13, título 22 partida 3ª que declara, que el juicio que fuere dado por falsos testigos ó por falsas cartas, pueda desatarse por vía de restitution. Pero semejante ley no puede ser en el dia enteramente aplicada; porque como se infiere de ella misma, no se refiere á la nulidad de la sentencia, sino al caso en que habiéndose pronunciado alguna, sea ó no con las formalidades del derecho y despues se prueba, que fué pronunciada en virtud de cartas falsas ó de falsos testigos. Pero como ya se ha dicho, en el dia solo se consideran nulas aquellas sentencias que han sido pronunciadas en juicios en que se haya faltado á las solemnidades mas precisas, aquellos que el legislador exige para la validacion de ellas. Segun nuestra legislacion vigente, hoy es de absoluta necesidad marcar la diferencia, entre la injusticia de una sentencia y su nulidad. Lo primero se verifica, cuando es pronunciada contra el derecho del que litiga; lo segundo, cuando se ha faltado á las leyes reglamentarias, ó por decirlo así, rituales de los juicios. En consecuencia, una sentencia puede ser justa, y sin embargo adolecer de algun vicio de nulidad, ó vice-



versa, tener todos los requisitos de legalidad y ser injusta. Para este caso, pues, en concepto del fiscal, se expidió la ley 13 tit. 22 part. 3ª y en la que en último resultado viene fundando Ahuja su pretendido recurso de nulidad.

Para reasumir, el suscrito hace presente al Tribunal, que se abstiene de pedirle alguna indicacion severa contra alguno de los funcionarios que han figurado en este negocio, porque el Tribunal á su vez, tomó á su cargo hacer esas indicaciones; y en atencion tambien, á que las causales que dieron motivo á esa indicacion, no importan una falta demasiado grave que haya causado faltas irreparables.

Por todo lo expuesto, el fiscal concluye con las siguientes proposiciones que sujeta á la deliberacion de la 3ª Sala de esta Corte Suprema de Justicia.

1ª Se declara, que en el presente juicio no se ha faltado á las leyes que arreglan el proceso.

2ª En consecuencia, la sentencia pronunciada en él, el 30 de Noviembre de 1865, no adolece de ningun vicio de nulidad por el que deba reponerse el proceso y exigir á las autoridades inferiores alguna responsabilidad.

3ª Se condena al promovente en las costas causadas en esta instancia.

4ª Devuélvanse las actuaciones al Tribunal remitente, con copia certificada de esta sentencia para los efectos legales, haciéndose saber, y archívese á su vez el Toca.

México, Junio 21 de 1870. (Firmado.)  
—Altamirano.

*Ejecutoria de la 3ª Sala de la Corte  
Suprema de Justicia.*

México, Febrero 2 de 1871.

Visto el recurso de nulidad, interpuesto por D. Antonio Ahuja, contra la sentencia

ejecutoria de segunda instancia, pronunciada con fecha treinta de Noviembre de mil ochocientos sesenta y cinco, en los autos que contra el mismo Ahuja, en calidad de antiguo socio industrial y gerente de la segunda casa de comercio establecida en Cosamaloapan el año de mil ochocientos cincuenta y dos, bajo la razon social "Miranda y Comp." promovió en Diciembre de mil ochocientos sesenta, ante el Juez de Distrito de Veracruz D. Juan Pablo Senties, como cesionario del Fisco, sobre contrabando de cantidad de tejidos extranjeros, blancos de algodón, de hilo de bolita y de carretilla; la entrega que de todas las constancias se hizo á ambas partes y al C. Fiscal para verificar la sustanciacion correspondiente; lo pedido por el último, sosteniendo la improcedencia del recurso y la validez de la referida sentencia; lo expuesto por la parte de Senties, adhiriéndose al anterior parecer y lo alegado al tiempo de la vista por la de Ahuja, patrocinada por el C. Lic. Joaquin Alcalde, fundando la nulidad en varias razones cuyos apuntes ha presentado. Considerando: que las causas de nulidad alegadas, son en el escrito en que se entabló el recurso, el haberse pronunciado la ejecutoria por falsos testigos y por falsas cartas, y en el informe producido por la parte del promovente ante esta Sala, el no haberse recibido en la segunda instancia la prueba que se ofreció sobre el hecho de haberle vendido D. Bernardo Silva, los efectos, materia del litigio principal; y el no haberse dado curso á la súplica que quiso interponer de la sentencia de vista, manifestándole el Juez de ella su improcedencia legal, siendo lo contrario, y la condenacion que en la misma sentencia se hace respecto de costas, contra lo prevenido en la Constitucion federal que prohíbe las judiciales, y contra la ley de procedimientos vigente entonces, que determina para las que no tienen ese carácter el modo de que fueran eficaces:

Que respecto de la primera causa alega-

da, nada se ha promovido para probarla, ni aparece cosa alguna en los autos, que la justifique, quedando por tanto como una afirmación aislada y sin fundamento.

Que la segunda causa, la inadmisión de la prueba ofrecida para acreditar la venta de Silva á Ahuja, no es exacta, supuesto que lo que se ofreció, con el carácter de que se mandara para mejor proveer, fué prueba de que el capital del primero, en la época de la introducción de los efectos, había sido capaz para adquirirlos y lo era en la del ofrecimiento para responder á las resultas del juicio; ni existe aquella causa pronunciada en forma por el Tribunal, y reclamada en tiempo por el interesado, y aún en el concepto de su existencia jurídica y de su reclamación oportuna, esa inadmisión era procedente en derecho, porque según lo actuado, tanto sobre la venta como sobre el capital de Silva, se habían recibido las pruebas conducentes en primera instancia; por manera, que admitir otras en segunda, sobre tales puntos, hubiera sido admitir en la segunda instancia, prueba sobre los mismos artículos que en la primera, lo cual es prohibido por la ley.

Que respecto de la súplica alegada, la parte de Ahuja después de oír la sentencia de segunda instancia, no consta que haya entablado formalmente aquel recurso, sin que arguya su deducción legal el solo intento de hacerlo, por más que la omisión haya sido á virtud de que el Ministro Superior de Justicia del Estado que conocía de los autos, dijera á la mencionada parte, que el recurso no tenía lugar por un decreto señalado; y además, que entablada en forma la súplica, era inadmisibile, por ser las sentencias pronunciadas en primera y segunda instancia conformes de toda conformidad.

Que la condenación en costas de que se queja Ahuja, en la hipótesis de ser contraria á las leyes, no funda nulidad de la sentencia ejecutoria en lo principal, estimándose, como son de estimarse, esos gastos ac-

cesorios, sin afectar la esencia del objeto causa eficiente de la acción y materia primitiva del litigio; menos, estando hecha por dos sentencias conformes y no habiendo sido reclamada debidamente.

Que el recurso de nulidad de que se trata, no fué intentado en el término legal; que se intentó cerca de tres meses después de notificada la ejecutoria, no debiendo tomarse en cuenta, la aclaración que se pidió de la sentencia, para contar de otro modo el tiempo, como quiere Ahuja, porque esa aclaración no fué sobre el punto principal, sino sobre liquidación del Comiso sentenciado y sobre costas, que en nada influye sobre la validez de la sentencia.

Finalmente: que la parte de Ahuja, tiene su derecho expedito para reclamar de quien le vendiera los efectos que han sido materia de estos autos, la indemnización de las pérdidas que estos le ocasionaron, si á ella ha lugar en justicia, así como para exigir la responsabilidad al Tribunal de segunda instancia por sus resoluciones, si así lo estima conveniente.

Por las consideraciones expuestas, y con apoyo de la ley 6ª tít. 10 libro 11 de la N. R.; artículo 48 de la Pauta de Comisos de 28 de Diciembre de 1843; artículo 152 del Arancel de Aduanas Marítimas de 4 de Octubre de 1845; artículo 134, 169, 170 y 171 de la ley de 16 de Diciembre de 1853, y de la ley 1ª tít. 19 libro 11 de la N. R. se resuelve:

Primero: No tiene vicio de nulidad la sentencia de segunda instancia, pronunciada en 30 de Noviembre de 1865, en los autos que ha seguido Ahuja y Senties sobre contrabando.

Segundo: Se condena á la parte de Ahuja en las costas de este recurso, cuyo cobro proceda conforme á la Constitución federal.

Hágase saber, y con testimonio de este auto, remítanse los de la materia al Juzgado de Distrito de Veracruz, para los efectos correspondientes, archivándose á su vez

el Toca. Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron esta 3ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados.)—*Juan J. de la Garza—J. M. del Castillo Velasco—M. Zavala—Luis Malanco*, secretario.

Son copias, México, Mayo primero de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juez de Distrito de Guadalajara por D. Gerónimo Pineda, contra el Juez 1.º de primera instancia de Colima por violación de Garantías.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL.

Ciudadano Juez:

El que suscribe, como Gefe Superior de Hacienda del Estado, y llevando la voz fiscal, en la forma que mas haya en derecho expongo:

Gerónimo Pineda pide amparo de garantías, por asegurar que en sus intereses se ha violado por los Jueces del fuero comun, el artículo 16 de la Constitución federal; y ademas, que D. Ramon Merodio, abriéndole una carta, ha infringido el artículo 25 de nuestro pacto fundamental.

Respecto al primer punto, y aun prescindiendo de la cuestion sobre si es admisible ó no el amparo en negocios judiciales, diré: que si el alcalde de Tonila ó juez de 1ª instancia de esta ciudad ha embargado indebidamente los bienes del Sr. Pineda, puede ocurrir en apelacion ó queja á los tribunales de Jalisco ó de esta capital para obtener la justicia que desee; tanto mas,

cuanto el C. Juez de 1ª instancia está dispuesto á ministrarle justicia, segun se vé en su informe de fojas 5, en que consta que el Sr. Pineda no se ha presentado á deducir sus derechos, y que es proverbial que los tribunales de Jalisco y Colima no se dobligan nunca á influencias, y administran justicia rectamente.

En el escrito del Sr. Pineda se nota mucha oscuridad en la apreciacion de los hechos; pero desde luego se vé, que es deudor de varios individuos, y que se han practicado diligencias judiciales que causen y motiven el embargo de sus bienes.

Por las leyes reglamentarias de la administracion de Justicia de Jalisco y Colima, se faculta á los Alcaldes y Jueces de 1ª instancia, para que mediante las diligencias precautorias y urgentes, se proceda al embargo de bienes; y segun el tenor literal del escrito del Sr. Pineda, parece que se han practicado esos requisitos, supuesto que asegura que las diligencias judiciales vinieron á esta ciudad.

Como el juicio de amparo se ha establecido para impedir los desmanes ó arbitrariedades de las autoridades, y como el Sr. Merodio no tiene autoridad pública de ninguna clase, si ha habierto alguna carta del Sr. Pineda, puedo acusarlo ante la autoridad competente por este hecho; pero no entablar el recurso de amparo, que no cabe de ninguna manera.

Por todo lo expuesto, y no encontrando que se haya violado ninguna garantía constitucional, al Juzgado de Distrito pide que desoche el ocurso del Sr. Pineda, dejándole á salvo sus derechos para que los entable por las vías comunes.

Colima, Diciembre treinta de mil ochocientos setenta. (Firmado.) *J. Guillermo Llano*.

*Sentencia del Juez de Distrito.*

Guadalajara, Marzo veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.